

Licenciada
Lury Ríos-Montt de Weller
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Guatemala 20 de noviembre de 2007

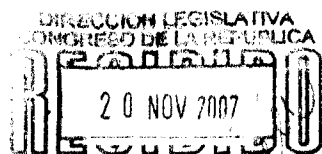
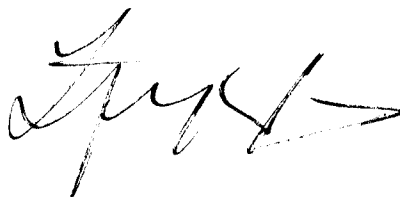
Licenciada
Ana Isabel Antillón
Directora Legislativa
Congreso de la República
Su Despacho

Licenciada Antillón,

Atentamente de dirijo a usted deseándole éxitos en el desarrollo de sus actividades diarias.

Adjunto le envío el Dictamen de la Iniciativa de Ley Número 3632 que dispone aprobar el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, suscrito por los Presidentes Centroamericanos, en la Ciudad de Panamá, el 10 de diciembre de 1992.

Sin otro particular, me suscribo atentamente,



Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

D I C T A M E N
INICIATIVA 3632

HONORABLE CONGRESO.

La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, recibió por conducto de la Secretaría y por disposición del Pleno, el expediente que contiene la copia certificada del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, suscrito por los Presidentes Centroamericanos, en la ciudad de Panamá, el 10 de diciembre de 1992 y presentado a consideración del Congreso, por el Presidente de la República, en ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal k) del artículo 183 de la Constitución Política de la República.

DOCUMENTOS APORTADOS.

El expediente contiene los siguientes documentos aportados al estudio del Tratado:

- Memorando número 279 de fecha 19 de septiembre de 1994 de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.
- Nota número 1112/Sme de fecha 21 de septiembre de 1994 de la Secretaría de la Presidencia del Organismo Judicial.
- Memorando número 26 de fecha 26 de enero de 1995 de la Dirección de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores.



Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

- Memorando número 55-2007 de fecha 13 de febrero del 2007 de la Dirección de Tratados Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

CONTENIDO DEL TRATADO.

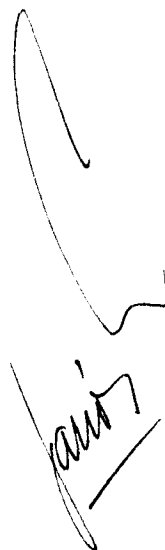
El 13 de diciembre de 1991, los Presidentes centroamericanos, firmaron el Protocolo de Tegucigalpa, que reforma la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos –ODECA-, que constituye el Sistema de la Integración Centroamericana y que en su artículo 12 entre otros órganos de ese sistema, estableció la corte Centroamericana de Justicia, cuya integración, funcionamiento y atribuciones deberán ser reguladas por su Estatuto.

La exposición de motivos del Estatuto de la corte Centroamericana de Justicia, por su importancia consideramos su inclusión dentro del presente dictamen, ya que permite conocer en forma integral el contenido, fines y naturaleza del órgano que se pretende crear:

“Exposición de motivos. HISTORIA: Ha sido un anhelo permanente de los Estados del Istmo centroamericano que se les reconozca como una sola nación, que permita a sus pobladores la plena realización de la justicia, la seguridad y el bien común.

En la misma forma ha sido también un vehemente deseo el que todas sus diferencias se resuelvan en forma pacífica y civilizada, que permita alcanzar permanentemente la paz social que anhelan sus pobladores.

En ese sentido se ha realizado diferentes esfuerzos, que han permitido evidenciar esa actitud permanente de paz de sus moradores, que se tradujeron en la Corte Centroamericana de Justicia o de Cartago, creada mediante el Protocolo suscrito en Washington D.C., en el año 1907, que sentó precedentes universales sobre el establecimiento de un Tribunal de



Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Justicia de carácter internacional vinculatorio y al cual tuvieran acceso como parte activa los particulares frente al Estado.

Conocida es la suerte de dicha Corte, la que en su efímera existencia dio muestras de lo que era, al posibilitar la solución de diferencias entre los estados a través de resoluciones judiciales que permitieran mantener la paz regional en época tan convulsiva.

Por razones histórico-políticas que no es del caso analizar, es hasta en la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA), en donde en forma permanente se crea la Corte Centroamericana de Justicia integrada por los Presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de los respectivos Estados, que se reunirían para resolver un determinado asunto que les fuera planteado.

Posteriormente, los Órganos Judiciales de Centroamérica recogen ese interés y propósito de sus pueblos y Estados, y en la primera reunión de Cortes Supremas de Justicia de Centroamérica, celebrada en la Ciudad de Guatemala, en marzo de 1989, se acuerda, entre otros, estudiar la forma de darle vigencia a la Corte Centroamericana de Justicia, presentando para tal efecto la delegación de Guatemala un proyecto de Convenio para la creación de la Corte Centroamericana de Justicia.

En la segunda Reunión de las Cortes Supremas de Justicia Centroamericanas, celebrada en la Ciudad de San Salvador, en junio de 1990, se acordó ratificar el acuerdo anterior y que la Junta de Presidentes de las Cortes continuará con el estudio de la ponencia presentada.

En la tercera Reunión celebrada en Tegucigalpa, en mayo de 1991, se presentó una nueva ponencia en la que se reafirma la ya presentada para la vigencia de la misma. En esta reunión, por resolución VII, se designó al relevante Jurisconsulto hondureño don Roberto



Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Ramírez, para que elaborara los estudios preliminares que determinaran la factibilidad del establecimiento de la Corte Centroamericana.

El Doctor Ramírez presentó su estudio a la reunión del Consejo Judicial Centroamericano, celebrado en la Ciudad de San José, Costa Rica, durante el mes de noviembre de 1991, en la cual se encomendó al referido profesional, la elaboración de los proyectos de Convenio de la Creación de la Corte y de su Estatuto, de acuerdo con las bases de lineamientos aprobados, a ser discutidos posteriormente en la ciudad de Guatemala.

Los delegados de las Cortes han tenido tres reuniones revisando el proyecto del Doctor Ramírez, en Guatemala, Tegucigalpa y San Salvador que se reflejan en el estatuto que hoy presentamos.

Es relevante señalar un suceso que ha venido a impulsar la actividad de las Cortes de Centroamérica, en el proceso integracionista judicial del Istmo, como es que el 13 de diciembre de 1991, en ocasión de la XI Reunión de Presidentes del Istmo Centroamericano, los seis Jefes de Estado de las Repúblicas del Istmo, firmaron el "PROTOCOLO DE TEGUCIGALPA" que reforma la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos (ODECA), y que constituye el "SISTEMA DE LA INTEGRACION CENTROAMERICANA", que en su artículo 12, crea como órgano del Sistema a la Corte Centroamericana de Justicia, el cual ha sido ya debidamente ratificado y depositado por los Estados de El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Debido a lo anterior, ha existido la necesidad de adecuar el trabajo inicialmente preparado por el jurisconsulto Don Roberto Ramírez y cumplir con lo señalado en el artículo 12 del Protocolo de Tegucigalpa antes mencionado, en el sentido de elaborar el Estatuto de la Corte Centroamérica de Justicia, dentro de los noventa días posteriores a la vigencia del mismo.



Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

UN PODER JURISDICCIONAL PARA LOS PAISES CENTROAMERICANOS:

Como se ha hecho referencia, la creación de la Corte Centroamericana de Justicia, no solo ha sido un deseo y anhelo de los países centroamericanos, sino que además en el Sistema de la Integración Centroamericana, se vuelve un Organismo que puede dictar sentencia de carácter jurídico vinculatorio para la solución de los conflictos regionales.

Así la Corte Centroamericana de Justicia se concibe como un Tribunal Regional, de jurisdicción privativa para los Estados del Istmo.

Su competencia se establece como una competencia de atribución, con exclusión de cualquier otro Tribunal y, además, de los conflictos entre lo Estados, conocer de los litigios entre las personas naturales o jurídicas residentes en el área y los gobiernos u organismos del Sistema de Integración Centroamericana.

ORGANIZACIÓN DE LA CORTE. Su organización básica se establece en el Estatuto y se desarrollará en su propio reglamento. Sin embargo, se determina el número mínimo de sus integrantes y se señalan las condiciones y requisitos que deben reunir, los cuales son iguales a los necesarios para el ejercicio de las más alta funciones judiciales en sus respectivos países.

Se establece su elección por los Órganos o Poderes Judiciales respectivos. Una vez electos los Magistrados desempeñarán sus funciones con absoluta y total independencia por el término de diez años, pudiendo ser reelectos. Además, gozarán de las inmunidades y prerrogativas acordadas a los Jefes de las Misiones Diplomáticas y no podrán en ningún momento ejercer función pública o administrativa, con excepción de la docencia.

Aunque su sede se designa en el Estatuto, la Corte podrá acordar reunirse y funcionar temporalmente en cualquier lugar de Centroamérica.

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

La duración de la Corte es permanente, debiendo sus integrantes y el Secretario de la misma, residir en el País Sede, Tendrá un Presidente y un Vicepresidente que ejercerán sus cargos por un año. La Presidencia será ejercida sucesivamente en el orden alfabético de los nombres de los países; y, la Vicepresidencia no podrá ser ejercida por ninguna razón, por magistrado de la misma nacionalidad del presidente.

Su presupuesto será proporcionado por partes iguales por los Estados miembros.

COMPETENCIA. La Corte tendrá una jurisdicción y competencia, amplia y completa: en lo contencioso, con carácter obligatorio para todos los Estados. Voluntaria, actuando como árbitro de derecho o de hecho.

La Corte, como se dijo, tendrá varios tipos de competencia. Una, como Tribunal Regional Internacional y conocerá en Instancia única de las controversias que se le planteen por los Estados.

Otra, comprende las disputas surgidas entre las personas naturales o jurídicas y un Estado o con alguno de los Organismos que conforman el Sistema de Integración Centroamericana.

Cabe destacar, que dentro de su competencia se establece el que pueda conocer a solicitud de parte, de conflictos que puedan surgir entre los Poderes u Órganos fundamentales de los Estados, y cuando de hecho no se respeten los fallos judiciales.

Además de las jurisdicciones mencionadas se le da atribución de órgano de consulta permanente de las Cortes Centroamericanas de Justicia, conociendo las consultas que le formulen, así como emitiendo recomendaciones que propicien la emisión de leyes uniformes.



Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

En cualquier momento las respectivas Cancillerías podrán procurar un avenimiento entre los Estados.

CONCLUSIONES. La vigencia de la Corte Centroamericana de Justicia reviste excepcional importancia por razón del momento político que caracteriza a los países centroamericanos.

Se estima que para que la paz del istmo sea duradera y permanente es necesaria la existencia de un control jurisdiccional que impida que los Estados puedan arrogarse derechos que no tienen, o convertirse en poderes arbitrarios nugatorios de toda justicia.

Las facultades que se le atribuyen con carácter excluyente, son jurisdiccionales. Se crea así un órgano supranacional que permitirá resolver los problemas propios del Sistema de la Integración Centroamericana en forma pacífica y civilizada.

La soberanía estatal, queda limitada por el sometimiento a la jurisdicción de la Corte, lo que implica que los Estados acaten sus decisiones.

La independencia y autonomía de la Corte, nace de la delegación de poderes que hacen los propios Estados; y, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales revisa y controla, mediante procedimiento judicial, los actos que ejecuten los Estados Miembros y los Órganos del Sistema de Integración Centroamericana, que afectan los Convenios y tratados vigentes entre ellos.

Desde luego también tienen acceso a esta jurisdicción, las personas naturales o jurídicas afectadas en sus derechos, por actos de algunos de los Estados o de los Órganos del Sistema de Integración Centroamericana.

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Debe señalarse la intervención que se confiere al “Consejo Judicial Centroamericano”, en la etapa previa a la integración e instalación de la Cote, en cuanto se le dan facultades de aplicación, interpretación y ejecución de las disposiciones contenidas en el Estatuto, así como a tomar todas las medidas pertinentes y hacer cuanta gestión fuere necesaria para asegurar su pronta instalación y funcionamiento.

Con ello no se hace más que continuar con el reconocimiento y participación que en el mismo Protocolo de Tegucigalpa se le confiere, dada su destacada labor en el proceso integracionista judicial centroamericano.

Finalmente cabe resaltar el contenido del artículo 6 del Estatuto, que lo toma de lo establecido para la cote de Justicia Centroamericana, o Corte de Cartago de 1907, y lo enriquece, al declarar a la Corte Centroamericana de Justicia, como representante de la conciencia nacional de Centroamérica y depositaria de los valores que integran la nacionalidad centroamericana, incorporando así a las nuevas reglas de convivencia de Centroamérica con el aporte axiológico que deberá informar a las futuras generaciones de la nuestra Patria Centroamericana.”

DE LOS DOCUMENTOS APORTADOS.

Los documentos aportados a consideración de este Organismo por los órganos y dependencias oportunamente consultados, son coincidentes de que el texto del protocolo no contiene normas que contravengan principios de la Constitución Política de la República ni de las leyes vigentes en nuestro país, razón por la cual coinciden en la conveniencia de su aprobación.

CONSIDERACIONES DE LA COMISION.

El 13 de diciembre de 1991, los Presidentes centroamericanos firmaron el Protocolo de Tegucigalpa, que reforma la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, que



Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

constituye el Sistema de la Integración Centroamericana y que en su artículo 12, entre otros órganos de ese sistema, establece la Corte Centroamericana de Justicia, cuya integración, funcionamiento y atribuciones deberán ser reguladas en su Estatuto, el cual oportunamente debería ser negociado y suscrito entre los Estados miembros, en un periodo de noventa días posteriores al 23 de julio de 1992, fecha en que entró en vigencia el Protocolo de Tegucigalpa, anteriormente relacionado.

La Corte funcionará conforme las normas de su Estatuto, ordenanzas, reglamentos y resoluciones que emita ella misma, será el órgano judicial principal y permanente del Sistema de la Integración Centroamericana, cuya jurisdicción y competencia regionales son de carácter obligatorio para los Estados. La Corte tendrá competencia y jurisdicción propias, con potestad para juzgar a petición de parte y resolver con autoridad de cosa juzgada, y su doctrina tendrá efectos vinculantes para todos los Estados, órganos y organizaciones que formen parte o participen en el Sistema de la Integración Centroamericana, y para sujetos de derecho privado.

Los procedimientos previstos en su estatuto y los que se establezcan en los reglamentos y las ordenanzas, tendrán por finalidad la salvaguarda de los propósitos y principios del sistema de la Integración Centroamericana, la objetividad de los derechos, la igualdad de las partes y la garantía del debido proceso.

Conforme las normas del Estatuto que se presenta a consideración de este Organismo, la Corte representa la conciencia nacional de Centroamérica y se considerará además, depositaria y custodia de los valores que constituyen la nacionalidad centroamericana, en tal virtud, los Magistrados que la integran no podrán considerarse inhibidos del ejercicio de sus funciones por el interés que puedan tener en algún caso o cuestión.

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

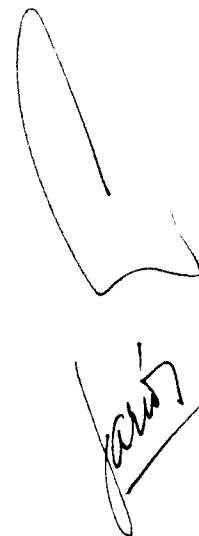
La competencia de la Corte será conocer, a solicitud de cualquiera de los Estados miembros, de las controversias que se susciten entre ellos. Se exceptúan las controversias fronterizas, territoriales y marítimas, para cuyo conocimiento se requiere la solicitud de todas las partes concernidas.

Conocerá igualmente de las acciones de nulidad y de incumplimiento de los acuerdos de los organismos del Sistema de la Integración Centroamericana. Conocer y resolver a solicitud del agraviado de conflictos que puedan surgir entre los poderes u órganos del sistema de la Integración Centroamericana.

Igualmente le corresponderá hacer estudios comparativos de las legislaciones centroamericanas para lograr su armonización y elaborar proyectos de leyes uniformes para realizar la integración jurídica de Centroamérica.

Conocerá en última instancia, en apelación, de las resoluciones administrativas, dictadas por los órganos u organismos del Sistema de Integración Centroamericana, que afecten directamente a un miembro del personal del mismo y cuya reposición haya sido denegada.

Es importante, aún cuando se transcribió anteriormente, señalar el contenido de uno de los párrafos de la exposición de motivos de la creación de la Corte, que dice: **“UN PODER JURISDICCIONAL PARA LOS PAISES CENTROAMERICANOS:** Como se ha hecho referencia, la creación de la Corte Centroamericana de Justicia, no sólo ha sido un deseo y anhelo de los países centroamericanos, sino que además en el Sistema de la Integración Centroamericana, se vuelve un Organismo que puede dictar sentencia de carácter jurídico vinculatorio para la solución de los conflictos regionales.”



Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Esta cita tiene importancia si tomamos en consideración el contenido del segundo párrafo del artículo 1 del Estatuto, que refiere que la Corte Centroamericana de Justicia, es el Órgano Judicial principal y permanente del “Sistema de la Integración Centroamericana, cuya jurisdicción y competencia regionales son de carácter obligatorio para los Estados; en igual forma, el contenido del artículo 3 del citado Estatuto, que establece que la Corte tendrá competencia y jurisdicción propias, con potestad para juzgar a petición de parte y resolver con autoridad de cosa juzgada, y su doctrina tendrá efectos vinculantes, para todos los Estados, órganos y organizaciones que formen parte o participen en el “Sistema de la Integración Centroamericana”, y para sujetos de derecho privado.

Como podrán notar los Señores Diputados, la Corte Centroamericana de Justicia, tiene importantes funciones, las cuales de alguna manera, guardando por supuesto los ámbitos de competencia, tienen similitud con los órganos superiores de justicia guatemaltecos, tal como lo refieren los artículos 203, 205, 214, 215 y 217 de la Constitución Política de la República, entre otros artículos de dicho cuerpo Constitucional, pero que se traen a colación debido a su contenido, el cual se transcribe a continuación; algunos de ellos, con los comentarios que al respecto ha emitido la Honorable Corte de Constitucionalidad, en la forma siguiente:

“Artículo 203.- Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones.

Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.”

Este artículo garantiza la no injerencia de ningún Organismo en las funciones jurisdiccionales de dicho Órgano, y sobre el cual la Corte de Constitucionalidad señaló:

“...Con el objeto de crear las condiciones esenciales de la administración de justicia, la Constitución estableció en sus artículos 203, 204 y 205 que el Organismo Judicial tendrá las garantías sin las cuales no es posible concebir un sistema de justicia que dé a los particulares la seguridad jurídica de que las decisiones judiciales estarán revestidas de objetividad e imparcialidad, entre las que se encuentran: la independencia de criterio como fundamento de la potestad de juzgar; la promoción de la ejecución de lo juzgado, la independencia funcional y económica, la no remoción de jueces y magistrados; así como la exclusividad absoluta de la función jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales que la ley establezca...” Gaceta No. 39, expediente No. 249-95, página No. 162, sentencia:

Sobre los procesos de elección de estos altos funcionarios, tanto de la Corte Suprema de Justicia como Magistrados de la Corte de Apelaciones, la Constitución estableció un determinado procedimiento, el cual se recuerda a los señores Diputados, en la forma siguiente:

“Artículo 214.- Integración de la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia se integra con trece magistrados, incluyendo a su presidente, y se organizará en las cámaras que la misma determine. Cada cámara tendrá su presidente.

El Presidente del Organismo Judicial lo es también de la Corte Suprema de Justicia cuya autoridad se extiende a los tribunales de toda la República.

En caso de falta temporal del Presidente del Organismo Judicial o cuando conforme a la ley no pueda actuar o conocer, en determinados casos, lo sustituirán los demás magistrados de la Corte Suprema de Justicia en el orden de su designación”.

“Artículo 215.- Elección de la Corte Suprema de Justicia. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un



Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

período de cinco años, de una nómina de veintiséis candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por un representante de los Rectores de las Universidades del País, quien la preside, los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del País, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución.

La elección de candidatos requiere del voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.

En las votaciones tanto para integrar la Comisión de Postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán, entre sus miembros, con el voto favorable de las dos terceras partes, al presidente de la misma, el que durará en sus funciones un año y no podrá ser reelecto durante ese período de la Corte”.

“Artículo 217.- Magistrados. Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el artículo 207, ser mayor de treinta y cinco años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de cinco años la profesión de abogado.

Los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República, de una nómina que contenga el doble del número a elegir, propuesta por una comisión de postulación integrada por un representante de los Rectores de las Universidades del país, quien la preside, los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión.”

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Se menciona esta forma de elección y los procedimientos formales que para su designación establece la Constitución, ya que reconociendo su alta jerarquía, no se concibe por ese cuerpo constitucional, un mecanismo que no revistiera esas solemnidades.

La Corte Centroamericana, no obstante la importancia y posición de Alto Tribunal que el Protocolo le reconoce, establece en su Artículo 8, que la Corte se integrará con uno o más Magistrados Titulares por cada uno de los Estados y su Artículo 9, determina que deberán reunir las mismas condiciones requeridas en su País para el ejercicio de las más altas funciones judiciales, quienes, conforme el Artículo 10, serán electos por las Cortes Supremas de Justicia de los Estados.

Como pueden notar los Señores Diputados, no obstante el reconocimiento de las altas calidades de los Magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia, a quienes se impone que deben tener las calidades de los Magistrados de la Suprema Corte Guatemalteca, no se le imponen los requisitos y procedimientos de elección que debieron afrontar éstos, situación que atenta contra el principio de igualdad que establece la propia Constitución Política de la República, razón por la cual esta Comisión estima procedente, que al aprobar el Estatuto de la Corte Centroamericana, se establezca un procedimiento mínimo de selección de quienes deberán ocupar dicho cargo en representación del Estado de Guatemala y no de la Corte Suprema de Justicia de nuestro País.

El procedimiento que se presenta a consideración de los Señores Diputados, sin vulnerar el contenido del Estatuto y mucho menos la independencia del Organismo Judicial, que se refiere a la administración de justicia y al cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, es el establecimiento, por convocatoria del Congreso de la República, de una Comisión de Postulación, quien en base a méritos deba seleccionar un número de candidatos, para que presentados a consideración de la Honorable Corte Suprema de



Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

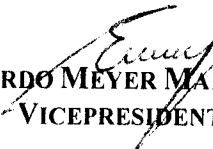
Justicia, sea ésta, conforme el Artículo 10 del Estatuto, quien proceda a realizar la elección y tomando en cuenta, que cada Estado, ha realizado la elección o designación, conforme sus propios procedimientos, sin que exista uno que sea uniforme para todos los Estados miembros.

DICTAMEN DE LA COMISION.

Luego de las consideraciones realizadas, esta Comisión estima procedente emitir **DICTAMEN FAVORABLE**, permitiéndose presentar a consideración de los Honorables Diputados, el proyecto de Decreto correspondiente para su discusión y trámite de aprobación, conforme la normativa aplicable al proceso de formación de la ley.

**SALA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES,
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, GUATEMALA CATORCE DE NOVIEMBRE
DE DOS MIL SIETE.**


ZURY RÍOS MONTT
PRESIDENTA


EDUARDO MEYER MALDONADO
VICEPRESIDENTE

JORGE ESTUARDO GIRÓN
SECRETARIO


EDGAR LEONEL AREVALO BARRIOS

RAFAEL EDUARDO BARRIOS

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

JUAN JOSÉ CABRERA ALONSO

CÉSAR EMILIO FAJARDO MORALES

OTONIEL FERNÁNDEZ ESCOBAR

CARLOS ENRIQUE LÓPEZ GIRÓN

HUGO RENÉ HEMMERLING GONZÁLEZ

JORGE MÉNDEZ HERBRUGER

JORGE LUÍS ORTEGA TORRES

LUÍS FERNANDO PÉREZ MARTÍNEZ

HÉCTOR JULIO PÉREZ ROJAS

JORGE ALFONSO RÍOS CASTILLO

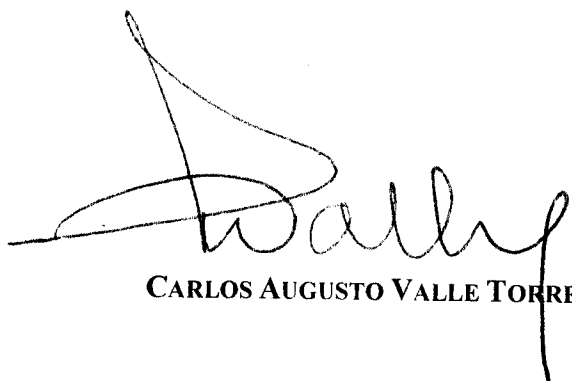
MARIO ISRAEL RIVERA CARRERA

EWALD MAURICIO SCHEEL AGUILAR

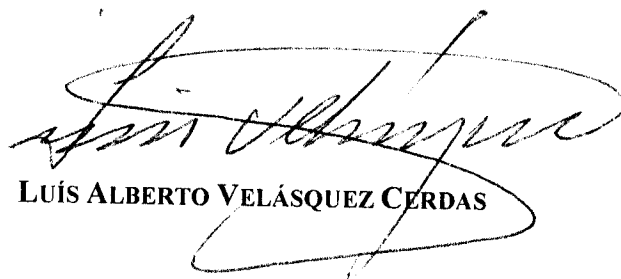
OBDULIO SOLÓRZANO MONTEPEQUE

GUILLERMO SOSA RODRÍGUEZ

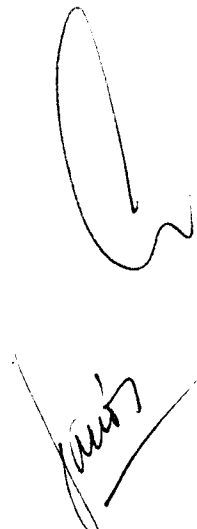
Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.



CARLOS AUGUSTO VALLE TORRES



LUÍS ALBERTO VELÁSQUEZ CERDAS



Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

PROYECTO DE DECRETO.

DECRETO NÚMERO

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que los Presidentes Centroamericanos suscribieron el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, en la ciudad de Panamá, el 10 de diciembre de 1992.

CONSIDERANDO:

Que sobre el contenido del Estatuto se solicitó y obtuvo la opinión favorable del Organismo Judicial y de otras entidades de Gobierno, las que coinciden que su contenido no contraviene normas constitucionales ni legales vigentes en nuestro país, siendo procedente aprobarlo emitiendo en tal sentido la respectiva disposición legal.

CONSIDERANDO:

Que conforme las funciones asignadas, los Magistrados de la Corte Centroamericana de Justicia, son representantes de sus Estados, electos para integrarla por las Cortes Supremas de cada uno de los países miembros, sin establecer el mecanismo de elección que cada Estado deberá fijar conforme su legislación interna, por lo que es procedente determinar éste, con el propósito de dar certeza a dicho nombramiento.

POR TANTO,

En ejercicio de las atribuciones que le confieren las literales a) y l) del artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala,



Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

DECRETA:

ARTICULO 1. Aprobar el Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia, suscrita en la Ciudad de Panamá, el 10 de diciembre de 1992, por los Presidentes Centroamericanos.

ARTICULO 2. Para la elección de los Magistrados propietarios y suplentes que deberá realizar la Corte Suprema de Justicia y que sean representantes del Estado de Guatemala, se establece el siguiente procedimiento:

- a. El Congreso de la República, dentro de los treinta días siguientes a la entrada en vigencia del presente decreto y que se hubiera cumplido con los requisitos legales necesarios para su depósito y demás trámites que correspondan al Organismo Ejecutivo, deberá convocar a una Comisión de Postulación, la que estará integrada en la forma siguiente: un representante de los Rectores de las Universidades del País, quien la preside, los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del País, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los Magistrados Titulares de la Corte de Apelaciones.
- b. La elección de candidatos requiere del voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión. En las votaciones tanto para integrar la Comisión de Postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación.
- c. La nómina de postulados será de ocho (8), profesionales.

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

ARTICULO 3. Una vez finalizada la labor de la Comisión de Postulación, ésta deberá entregar al Pleno del Congreso, la nómina de candidatos a ocupar los cargos de Magistrado Propietarios y Suplentes de la Corte Centroamericana de Justicia. El Congreso, por conducto de la Secretaría, remitirá la nómina de propuestos a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, para que dicho Organismo, dentro del término de treinta días, proceda a elegir a los magistrados propietarios y suplentes con el voto favorable de las dos terceras partes del total de sus miembros.

ARTICULO 4. Electos los Magistrados propietarios y suplentes a la Corte Centroamericana de Justicia, la Corte Suprema de Justicia notificará al Congreso, para efectos de su juramentación conforme lo establece la Constitución Política de la República.

ARTICULO 5. Para el cumplimiento del compromiso contenido en el Artículo 42 del Estatuto de la Corte Centroamericana de Justicia que se aprueba, el Organismo Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, fijará dentro del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para cada ejercicio fiscal, la partida necesaria para el cumplimiento de esa obligación.

ARTICULO 6. El presente Decreto entrará en vigencia el quince de enero de dos mil ocho.

**PASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN,
PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN.**

**DADO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA
CIUDAD DE GUATEMALA EL DIA _____ DEL MES DE _____ DEL
AÑO DOS MIL SIETE.**